

# XXXV JORNADAS ACADÉMICAS DE COLPROBA

## *Comisión de derecho Civil y Comercial*

**Tema:** Fraude a la legítima en Sucesiones Notariales

**Subtemas:** tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, fraude societario y desheredación.

Autora: Dra. Julieta Tavernese

Matrícula CALM T° 13 F° 38

Teléfono +541168605598

Dirección: Güemes 5150, Caseros.

Correo: [Drajulietatavernese@gmail.com](mailto:Drajulietatavernese@gmail.com)

**SUMARIO:** En el presente se analiza el posible funcionamiento y recepción de las sucesiones notariales y de como las mismas pueden resultar en un mecanismo para vulnerar el derecho a la legítima y evadir el control judicial sobre la disposición de derechos patrimoniales, proponiendo en dicho sentido limitar su trámite a casos puntuales.

## **La desprotección de los herederos legitimarios frente a un posible procedimiento sucesorio notarial**

El proceso sucesorio, entendido como aquel destinado a transmitir post- mortem los derechos y obligaciones de los sujetos a sus herederos, muchas veces encuentra aristas legales y conflictos patrimoniales entre estos últimos, que derivan en incidentes judiciales que persiguen obtener certeza respecto a la vocación del heredero o beneficiario testamentario, la cuantía y avalúo del acervo o la legitimación de los acreedores del causante. Todos los mencionados anteriormente, son supuestos que sin duda requieren una profundización en la historia de vida del causante, analizando aspectos que exceden actos jurídicos o vacíos legales frente a una u otra conducta del causante o sus herederos.

Sin embargo, dentro de tanta incertidumbre inherente a una sucesión, hay un principio sucesorio de orden público conocido por todos, consistente en que el o la cónyuge, los descendientes o en su defecto, los padres del causante tienen derecho a una porción del acervo hereditario de la que no pueden ser privados por donaciones o disposiciones testamentarias; una modificación relevante respecto al antiguo código civil, que permitía la desheredación de herederos forzosos por expresa cláusula testamentaria. La desheredación fue subsumida por el instituto francés de la exclusión por indignidad, ampliando sus causales pero reduciendo la legitimación para invocarla.

Es entonces que se puede interpretar que la porción legítima constituye un derecho para los herederos, y una obligación para el causante.

Para defender este derecho, los legitimarios cuentan con mecanismos de protección en forma de las acciones de entrega y complemento, el deber de colacionar y la reducción de disposiciones testamentarias y donaciones.

A pesar de ello, resulta inevitable reconocer la existencia de artilugios destinados a burlar el derecho a la legítima, y uno de ellos es la creación de sociedades cuyo capital aportado

constituye una parte o la totalidad del acervo sucesorio y en la que el causante solo tiene cuotas o acciones minoritarias.

El mencionado es un claro supuesto de fraude a la legítima, entendida como una maniobra de aparente licitud destinada a encubrir un móvil ilícito como lo es la sustracción de activos del patrimonio que conformaría el acervo hereditario afectado a la legítima, perjudicando así a quienes tienen derecho a ella.

Dicha circunstancia no se encuentra prevista en el libro quinto de nuestro actual código civil y comercial, pero sí de forma implícita en los artículos 12 y 339 del mismo, aludiendo a que los actos jurídicos otorgados en fraude a la ley deben someterse a la norma imperativa que se intentó eludir mediante el mismo; así como también cabe destacar la acción de inoponibilidad a la persona jurídica prevista en el art. 144, en la que responsabiliza a todos los intervinientes de forma solidaria e ilimitada. También se aprecian sanciones a dicha conducta en la ley 19550, como la mencionada inoponibilidad y el corrimiento del velo societario en su art. 54.

Ahora bien, a diferencia de los supuestos en los que operan acciones de entrega y complemento, situación en la que los herederos legitimarios encuentran una mayor facilidad para determinar si corresponde su ejercicio -En virtud de su conocimiento o del acceso a la información respecto de aquellos bienes a titularidad actual o pasada del causante-, resulta más complejo identificar preliminarmente como la creación o la intervención de una persona jurídica puede generar una vulneración a la legítima. Esto debido en menor medida a la apariencia de licitud que el acto refleja, y en mayor medida por la complicidad de terceros que, en muchas de esas ocasiones, suelen ser otros herederos legitimarios con conocimiento o representación de las intenciones del causante.

Volviendo al proyecto de ley que regula las sucesiones intestadas notariales, este indica que su procedimiento requiere principalmente de la unanimidad de los interesados, tanto para la obtención del acta de notoriedad que determina las calidades de herederos, legatarios y acreedores, como para la partición de los bienes. También modifica el art. 2337 del código civil y comercial que establecía la investidura de pleno derecho a partir de la apertura de la sucesión pero fijaba la

necesidad de una declaración judicial para la transmisión de bienes registrables, conservando lo establecido respecto a la investidura pero no fijando ningún requisito alguno para la disposición de bienes. Para el sub examine, el consentimiento unánime para la determinación en trámite notarial de aquellos en calidad de sucesores resulta en vano por ser herederos de pleno derecho. Esto quiere decir que de tratarse de una sucesión intestada solo con legitimarios, no requieren del acta de notoriedad para proceder con la partición.

Sin embargo, dicho consentimiento respecto al proceder del trámite notarial sí resulta importante al momento de la partición. Sin profundizar en las consecuencias que genera la posible transmisión de bienes sin control judicial y la inseguridad jurídica que ello implica, este análisis pretende hacer foco en cómo las sucesiones notariales podrían resultar una herramienta expedita y conveniente para ocultar fraudes a la legítima, debido a la intervención de aquellos cómplices y/o responsables del acto que además tienen un interés en beneficiarse en razón del defraudado. Sobre todo, porque, si bien el trámite sucesorio notarial requiere documentación probatoria de los bienes a transmitir, este fija en cabeza de los interesados la obligación de inventario y avalúo. De esta forma, si el causante sustrajo bienes del acervo hereditario y los demás herederos lo saben, no solo que pueden omitir la denuncia de esos bienes, sino que pueden eludir el control judicial que le daría al perjudicado la oportunidad en el marco de un proceso sucesorio de ejercer su defensa pertinente y responsabilizar conforme indica la ley a los defraudadores.

Claro que existe la posibilidad de que ese conocimiento sea posterior y que entonces el defraudado pueda efectivamente iniciar las acciones legales pertinentes, pero habiendo ya invertido en el trámite notarial y con los costos judiciales que la apertura de un proceso implica, sumado a la falta de garantías de resultado, resulta poco probable que el heredero defraudado persiga un remedio judicial, y de hacerlo, pocas son las posibilidades de que su derecho sea materialmente satisfecho o que la recompensa por todo el daño y el tiempo transcurrido sea la que debió ser.

Es necesario comprender que, de forma pública y notoria, a los procesos sucesorios judiciales les precede la reputación de ser largos, burocráticos y costosos, al punto muchas veces de rozar lo antieconómico. Esto porque es común que, en los procesos sucesorios, se ventilen e

intercedan conflictos interpersonales que encuentran su origen en las cuestiones patrimoniales que los motivan. Es entonces que la aparición de las sucesiones notariales aparece como una opción más atractiva que desalentaría estos conflictos, reduciría la burocracia y culminaría en menor tiempo. Estos beneficios - que si efectivamente son tales es motivo para otro análisis - pretenden obnubilar al interesado, y hacerle perder el interés en llevar adelante un proceso judicial que le otorgaría garantías de defensa y seguridad jurídica.

Para concluir, vale aclarar que el presente análisis pretende, por un lado, alertar a los letrados de estas situaciones que, si bien atípicas, es probable que surjan de sancionarse y reglamentarse el trámite sucesorio notarial, y de esta forma exponer que si bien quien analiza ve con buenos ojos una alternativa al proceso sucesorio judicial, que derive en una descongestión del servicio de justicia, el actual proyecto no resulta apropiado para la cantidad de situaciones que se pueden suscitar dentro de su ámbito.

## **CONCLUSIÓN**

**Propongo que desde los colegios de abogados se presenten durante lo que lleve el tratamiento legislativo del proyecto, una solicitud para limitar la tramitación notarial de la sucesión a aquellos casos de heredero único o a las sucesiones testamentarias donde no haya herederos legitimarios.**